

“INUNDAR EL EDÉN”

La presa de Ilisu sobre el río Tigris – Turquía

La presa de Ilisu y los derechos humanos

Texto: Anna Irvin

Se calcula que hay más de 15 millones de kurdos viviendo en Turquía, principalmente en el sudeste del país, en una región atormentada por una larga y trágica historia de conflictos, donde se proyectó la presa de Ilisu.

Desde 1984, el conflicto armado entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) y el Estado turco ha devastado la región donde se pretende construir esta presa. Se calcula que la guerra ha causado unos tres millones de desplazados, 30.000 muertos y la destrucción de más de 3.000 localidades. Pese al alto el fuego establecido en 1999, buena parte de la región continúa en estado de emergencia hasta hoy. Y los abusos sobre los derechos humanos siguen siendo demasiado frecuentes, como revela claramente la amplia lista de denuncias contra Turquía en los Tribunales Europeos de Derechos Humanos. La violación de los derechos humanos contra los kurdos está muy extendida en el sureste de Turquía. Pero, además, la región sufre gravemente los problemas derivados de la pobreza. Los ingresos per capita en esta zona rondan el 42% de la media nacional y apenas llegan a una cuarta parte de la que tienen las ciudades turcas del Oeste.

La presa hidroeléctrica de Ilisu está proyectada en el cauce del río Tigris, a unos 65 km de la frontera con Siria. Supondría el desplazamiento de 78.000 personas, en su mayoría kurdos; inundaría 68 pueblos, además de la histórica y monumental ciudad de Hasankeyf, con sus 10.000 años de antigüedad, que fue capital de siete imperios mesopotámicos; y generaría serios problemas ecológicos, socioeconómicos y de desabastecimiento aguas abajo, en Siria e Irak.

Ilisu es el proyecto hidroeléctrico más ambicioso de Turquía. Con un coste de unos 2.000 millones de dólares, forma parte del llamado “Proyecto del Sudeste de Anatolia”, más conocido como GAP (su acrónimo en turco), que prevé la construcción de 22 grandes presas y 19 plantas generadoras sobre los ríos Tigris y Eufrates.

Cuando el Banco Mundial retiró su apoyo a los proyectos del GAP, la financiación quedó a cargo de la entidad suiza UBS (Union Bank of Switzerland), junto con el posible apoyo de las agencias de crédito a la exportación de Austria, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, aunque la campaña internacional contra la presa de Ilisu logró en 2002 que el Reino Unido se desvinculara del proyecto.

A pesar de todo, el Gobierno turco ha seguido adelante con sus planes, y otras compañías alemanas, austriacas y francesas se involucraron en el proyecto. Así, la campaña contra la presa de Ilisu continúa, y denuncia la falta de consulta a los afectados, la confusión en las cifras de desplazados, la negativa a considerar otras alternativas, los graves impactos medioambientales, sociales y culturales que acarrearía, así como la ausencia de un plan de realojo y compensación para los desplazados.

Los planes de Turquía para aprovechar los caudales del Tigris y el Eufrates, que nacen en el Kurdistán turco, son antiguos. La Dirección General de Obras Hidráulicas (DSI) se creó en 1954 precisamente para ello. El discurso oficial se basa en el eufemismo de "reinstaurar la civilización en la Alta Mesopotamia", marginando el patrimonio y la herencia cultural kurda. Aunque ese discurso oficial sitúa como objetivo central del GAP la promoción del desarrollo en la zona mediante la producción hidroeléctrica y la masiva transformación de regadíos, los afectados insisten en que el GAP encubre una estrategia militar de dispersión del pueblo kurdo.

Entre los afectados por la presa de Ilisu se denuncian los planes para dispersar a las comunidades en las grandes ciudades a fin de diluir su identidad y acabar con su cultura e incluso con su lengua. El contexto bélico se viene usando para justificar la represión de cualquier movimiento de oposición al proyecto. El Congreso Mundial de Arqueología, que se esfuerza por salvar el ingente patrimonio arqueológico de la zona, afirma que el hecho de desalojar de sus tierras a 78.000 kurdos, destruyendo sus raíces culturales, no dista mucho de ser una "limpieza étnica".

El desastre humanitario de los cientos de miles de desplazados por una guerra que se ha agravado en los últimos años no sólo exige soluciones urgentes, sino que hace más inviable el desplazamiento y reasentamiento digno de los 78.000 afectados por el proyecto de Ilisu.

Hay un episodio ilustrativo sobre la situación en la que se halla la población de la región. Hace poco, en la carretera cercana al lugar donde se pretende construir la presa, una mujer le indicó a un miembro de la organización Kurdish Human Rights Project el lugar donde se hallaban sus tierras, que habían sido ocupadas por el ejército para construir una base de seguridad de las obras. Cuando él le preguntó por qué no se oponía a ello o reclamaba adecuadas compensaciones, ella le respondió: "Pero estamos hablando de soldados. Ellos son parte del Estado. ¿Cómo puedo protestar ante lo que hace el Estado? He

perdido a mi marido en la guerra. Sólo tengo un hijo y no quiero perderlo luchando contra las fuerzas militares. No puedo sacrificar a mi hijo por un pedazo de tierra".